

---

## **Resumen para Medios de Comunicación**

### **Memoria 2021**

#### **Tribunal Superior de Justicia de Madrid**

---

##### **LA PERVIVENCIA DE CIERTAS LIMITACIONES DE SEGURIDAD Y LAS SECUELAS DEJADAS POR LA PANDEMIA IMPIDEN DECLARAR COMO SUPERADA LA LACERANTE LACRA VIVIDA**

En las Memorias correspondientes a las dos anualidades anteriores hicimos un repaso, más o menos minucioso, de la más que notable incidencia producida por la pandemia derivada del Covid-19 en el funcionamiento de nuestros órganos judiciales.

La evolución de la pandemia en este período fue poniendo de relieve el paso de la más acuciante situación inicial a un estado tendente a la normalización, objetivo que todavía no puede considerarse logrado en plenitud.

Pese a reconocer la enorme distancia que afortunadamente nos separa de los meses iniciales, la pervivencia de algunas limitaciones de seguridad, y sobre todo, las secuelas dejadas por tan abrumadora pandemia, impiden desde un punto de vista asentado en el realismo, declarar como superada tan lacerante lacra vivida.

Precisamente, en un ejercicio de pronóstico que no resultaba nada forzado, ya habíamos anunciado que la reprogramación de agendas y la suspensión de actuaciones judiciales que tuvo que acometerse para acomodar la actividad judicial a la prioridad de proteger la salud y minorar el riesgo de contagios, ocasionaría un desajuste en los índices de pendencia y los tiempos de respuesta ya de por sí inadecuados en muchos juzgados y tribunales.

Los datos estadísticos de los que disponemos ahora al analizar el resultado del año 2021 nos permiten calibrar hasta qué punto se han cumplido aquellos pronósticos, y al mismo tiempo reflejar en qué medida y ámbitos concretos se proyectan los efectos de la crisis sanitaria, que afloran en determinados órdenes jurisdiccionales ahora con especial intensidad.

Los efectos de una crisis de la intensidad que caracteriza a la que venimos comentando es evidente que se proyectan sobre múltiples aspectos de la vida. El sanitario ocupa sin duda alguna el lugar preferente, pero el que impregna al ámbito socioeconómico en general es inmediato. Cualquier crisis de estas dimensiones (incluso de mucha menor entidad) tiene un reflejo

directo en el mundo de las relaciones jurídicas, dado que su repercusión genera conflictos cuya solución ha de encontrarse en Derecho.

En la Memoria anterior dábamos cuenta del descenso generalizado del dato de ingreso de asuntos en los órganos judiciales durante el año 2020, hallando explicación este fenómeno en la ralentización que se produjo con carácter general en la actividad económica. Y dábamos cuenta del desglose de esta disminución por órdenes jurisdiccionales, siendo común el efecto a las jurisdicciones penal, social y contencioso, con un incremento que entonces calificamos de testimonial en el orden civil (un 0,1%).

La administración masiva de vacunas en el año 2021 contribuyó decisivamente a frenar la repercusión del Covid-19 en las actividades cotidianas, y ello tuvo una repercusión evidente en la dinámica económica. Pero a la vez, sirvió también de impulso a la actividad de quienes se dedican a postular ante los órganos judiciales la defensa de derechos, al aflorar las consecuencias económicas y patrimoniales de la crisis.

#### **EL ANÁLISIS DE LOS DATOS NO INVITA AL OPTIMISMO A LA HORA DE OFRECER A LA SOCIEDAD UN BALANCE TAN ALENTADOR COMO QUISIÉRAMOS**

A modo de resumen, los datos generales que reflejan la evolución del año 2021 estadísticamente con relación a los años anteriores, se corresponden con las cifras que exponemos a continuación.

Han sido recopiladas no solo con relación al precedente inmediato en período anual, sino también rescatando del archivo los datos de actividad anteriores a la aparición de la pandemia con el fin de proporcionar un examen más completo de lo que es la evolución de la carga, resolución y pendencia de los órganos judiciales del ámbito del Tribunal Superior.

#### **DATOS NUMÉRICOS**

|                    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| ASUNTOS INGRESADOS | 888.286     | 816.674     | 927.624     |
| ASUNTOS RESUELTOS  | 856.768     | 738.976     | 919.636     |
| ASUNTOS PENDIENTES | 370.210     | 450.536     | 483.549     |

#### **EVOLUCIÓN PORCENTUAL**

|                    | <b>2018/2019</b> | <b>2019/2020</b> | <b>2020/2021</b> |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| ASUNTOS INGRESADOS | +6,2 %           | -8,1 %           | +13,6 %          |
| ASUNTOS RESUELTOS  | +4,0 %           | -13,8 %          | +24,4 %          |
| ASUNTOS PENDIENTES | +12,7 %          | +24,3 %          | +5,05 %          |

Si ponemos estas cifras en relación con el conjunto del Estado, comprobamos un elemento básico en común: la tendencia de incremento.

También puede verificarse que la Comunidad de Madrid ha soportado el ingreso de casi una séptima parte (6,76 exactamente) de los asuntos ingresados en los juzgados y tribunales españoles en 2021: 6.273.090.

La plantilla de jueces y magistrados en servicio activo que sirve destino en la Comunidad de Madrid con respecto al conjunto del Estado viene a ser equivalente a la misma proporción. En el ámbito de este Tribunal Superior de Justicia se cuenta en la actualidad con 801 jueces y magistrados en servicio activo, lo que supone una 6,64 parte de los que se hallan en esta situación en el conjunto del Estado (5.320).

Las lecturas a las que pueden ser sometidos los datos comprendidos en los cuadros anteriores son múltiples, pero no puede decirse que inviten al optimismo a la hora de ofrecer a la sociedad a la que nos debemos un balance tan alentador como quisiéramos. Y recordemos que un documento como el que refleja la presente memoria de actividad y necesidades de los órganos judiciales debe verse presidido por la transparencia y por la objetividad.

Desde estas reglas básicas puede apreciarse que en el año donde mostró su mayor intensidad la pandemia (2020) se produjo un descenso acusado del ingreso de asuntos y asimismo del índice de resolución (debido en ambos casos a las medidas restrictivas aplicadas a la actividad judicial).

En el año 2021 se produce el incremento notable del ingreso de asuntos como consecuencia de la “recuperación” de actividad tanto a la hora de acudir a juzgados y tribunales en ejercicio de acciones y derechos como en la vuelta a la senda de la normalidad en el trabajo diario de los órganos judiciales.

Ahora bien, la cifra que marca negativamente el balance es el incremento de los asuntos pendientes. En la actualidad, el dato se eleva a más de cien mil con relación al 2019, el ejercicio anterior a la pandemia.

Si descendemos a un análisis por órdenes jurisdiccionales, la evolución de los tres parámetros básicos sobre los que pivotan nuestros seguimientos estadísticos nos sitúa ante cambios de registros y asimismo de tendencia entre los años 2020 y 2021, que resultan dispares.

Podríamos esquematizarlos de la siguiente manera:

- En el **orden civil**, la evolución presenta un incremento del **18,6 %**.
- En el **orden penal**, de un **9,2 %**.
- En el **orden contencioso-administrativo**, de un **22,4 %**.
- En el **orden social** el incremento de ingreso es del **5,5 %**.

Dentro de las previsiones iniciales en torno a las consecuencias que podría acarrear la pandemia sufrida, se temió notablemente por la evolución de la litigiosidad en el orden social. Se auguraba que los efectos a corto y medio plazo de la repercusión en el empleo de la proyección del Covid-19 implicarían un alto riesgo de colapso, por ejemplo, en materia de despidos: sin embargo, no se ha experimentado un desarrollo tan negativo.

En cambio, como también se suponía, sí se ha producido un efecto muy negativo en la jurisdicción civil.

Los datos estadísticos permiten destacar en el ámbito patrimonial preferentemente las más notables consecuencias. En el terreno judicial se traducen en un importante incremento de asuntos derivados de las reclamaciones de cantidad tradicionales, a lo que se suman otros factores, entre los que destacamos fenómenos relacionados con la litigiosidad en masa, dentro de los cuales además afloran “nuevas” figuras como las deudas generadas por el uso creciente de microcréditos.

#### **LA VIDA JUDICIAL HA SUFRIDO UN NOTABLE QUEBRANTO QUE NO HA PODIDO AFRONTARSE NI CON MÁS LABORIOSIDAD NI CON MEDIDAS DE REFUERZO**

De todos modos, sean cuales sean las causas preponderantes que fundamentan o contribuyen decisivamente a estas cargas de entrada, lo cierto es que la situación judicial ha sufrido un notable quebranto, que no ha podido afrontarse suficientemente por más que la laboriosidad de los órganos judiciales y las medidas de refuerzo articuladas hayan paliado lo que hubiese podido llevar a un panorama incluso más preocupante.

- En la **jurisdicción civil** el número de asuntos ingresados alcanzó los 432.422, con un incremento del **18,6%** respecto del año 2020, y se resolvieron 407.612 asuntos, un **35,2%** más que en el año 2020, quedando en trámite al acabar el año 320.386 asuntos, un 10,1% más que al finalizar la anualidad anterior en que fueron 291.112.
- En la **jurisdicción penal** se ha producido el ingreso de 390.139 asuntos, con un aumento del **9,2%**, habiéndose resuelto 403.876, cifra superior a los 356.957 del pasado año, quedando en trámite 88.451, lo que significa un **2,5%** menos que en 2020, año que terminó con 90.715 asuntos.
- En la **jurisdicción contencioso administrativa** se registraron 35.178 asuntos, con un incremento del **22,4%** respecto a 2020. Se resolvieron 33.031 asuntos, un **19,5%** más que en 2020, y quedaron en trámite 33.463 asuntos, un **11,0%** más que el año anterior, en que fueron 30.141.

- En la jurisdicción social ingresaron 69.885 nuevos asuntos, con un aumento del **5,5%**. Se resolvieron 75.117 asuntos, un **41,9%** más que en 2020 y quedaron en trámite 41.429 asuntos, con una disminución del **15,1%** respecto del año anterior, que terminó con 48.568 asuntos.

A nivel de Comunidades Autónomas, sólo la de Andalucía, con unos ingresos anuales de 1.245.238 asuntos, y la de Cataluña, con una entrada de 1.010.159 asuntos, superan a la de Madrid. La comparativa entre las tres Comunidades Autónomas fue la siguiente:

| CCAA      | INGRESADOS     |               | RESUELTOS      |               | EN TRÁMITE AL ACABAR EL AÑO |              |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| ANDALUCÍA | 1.245.237      | +12,3%        | 1.281.842      | +20,4%        | 636.728                     | -3,8%        |
| CATALUÑA  | 1.010.087      | +16,0%        | 1.014.245      | +23,7%        | 546.600                     | +0,8%        |
| MADRID    | <b>927.624</b> | <b>+13,6%</b> | <b>919.636</b> | <b>+24,4%</b> | <b>483.549</b>              | <b>+5,0%</b> |

Como ya se ha indicado, la pendencia de asuntos se incrementó en un cinco por ciento en la Comunidad de Madrid, situándose este Tribunal Superior de Justicia con el mayor incremento porcentual de asuntos en trámite al acabar el año 2021, de entre todos los Tribunales Superiores de Justicia.

La tasa de litigiosidad o número de asuntos registrados por cada 1.000 habitantes en Madrid fue de 137,1 con un incremento anual del 13,9%, situándose en cifras superiores a la media nacional, que fue de 132,3 asuntos.

Las sentencias dictadas por jueces y magistrados profesionales se situó en el 91,4% del total, cifra inferior al año precedente, lo que supone un mayor número de sentencias dictadas por jueces sustitutos y magistrados suplentes.

|  | PORCENTAJE DE SENTENCIAS DICTADAS POR JUECES DE CARRERA |      |           |
|--|---|------|-----------|
|  | 2020  | 2021 | EVOLUCIÓN |
|  | 94,01   | 91,4 | -2,8%     |

La cifra está por encima de la media nacional, conforme a la cual el porcentaje de sentencias dictadas por jueces de carrera es de 87,3%.

Del total de sentencias dictadas por unos y por otros, fueron recurridas durante el año 2021 un 17,1%, lo que supone un aumento del 7,4% sobre las que lo fueron en 2020. A nivel nacional el porcentaje de las sentencias recurridas ha sido del 15,9%, inferior al de la Comunidad de Madrid.

**EN LOS JUZGADOS MADRILEÑOS ESTÁN PARALIZADOS CASI MIL MILLONES DE EUROS, CIFRA QUE DEBERÍA VOLVER AL CIRCUITO ECONÓMICO CUANTO ANTES**

Como complemento a lo que es la exposición estadística básica de la evolución de asuntos, consideramos que debe reflejarse otro dato de enorme importancia.

A la fecha de cierre de esta Memoria (contemplando por lo tanto la situación al término del primer trimestre del año en curso) el importe económico correspondiente a los asuntos referidos que se halla depositado en las cuentas de consignaciones de los órganos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid asciende a 910.406.740,70 euros.

Una suma de trascendente calado que debiera retornar al circuito económico a la mayor brevedad posible.

No podemos dejar de insistir en la importancia de la solidez del sistema judicial para que el desarrollo económico despliegue sus efectos en plenitud. Este desarrollo en una sociedad avanzada no solo depende de la fortaleza de las estructuras económicas; aspectos como la seguridad jurídica o la rapidez del sistema que ha de velar por el respeto en el mundo económico a los postulados del Estado de Derecho estimamos que son factores innegables que llevan a demandar, una vez más, un esfuerzo responsable por la inversión en Justicia.

De lo expuesto hasta ahora podemos afirmar que el sistema no ha colapsado, pero sí se ha visto sometido a un grave perjuicio, ante el que resulta inaplazable adoptar medidas decididas, solventes y que se correspondan con la voluntad demostrada para con otros sectores de la sociedad, si no se quiere cronificar un balance negativo a la hora de presentar ante la sociedad la situación de la Justicia española.

**EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID APUESTA POR DEJAR ATRÁS EL MODELO DECIMONÓNICO DE CREACIÓN DE ÓRGANOS JUDICIALES...**

Afirmábamos en la Memoria correspondiente al año 2020 que la fortaleza de todo sistema se mide mejor que nunca en las situaciones de crisis. Nuevamente hemos de dejar constancia de que los órganos judiciales radicados en la Comunidad Autónoma afrontaron con notable dedicación las durísimas condiciones en las que hubo que hacer frente a la pandemia.

Ahora bien, si puede que nos encontremos ya en una fase de progresiva superación de la crisis sanitaria, lo que no podemos decir es que los efectos de esa crisis, trasladados a los juzgados y tribunales, vayan a ser superados con suficientes garantías de eficacia. Hemos de expresarlo con claridad.

Las peticiones de ampliación de la planta judicial que se incluyeron en la Memoria anterior se han visto a todas luces defraudadas.

Frente a los 145 órganos judiciales cuya creación considerábamos objetivamente necesaria, el Real Decreto 1052/2021, de 30 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado del día siguiente, contempló para Madrid la creación de un muy reducido número de unidades judiciales, cuya insuficiencia contradice la afirmación de la propia norma en torno a la proporcionalidad y eficacia.

El Decreto respondía más a una tendencia que a una tradición, al menos a una tradicional forma de entender el modo de afrontar el crecimiento de la litigiosidad: la suma o la creación anual de “unidades judiciales”, dentro de las cuales se incluyen plazas estrictamente y órganos de nueva planta.

La medida se ha mostrado insuficiente, e incluso ha llegado a ser cuestionada en las más recientes iniciativas legislativas que han partido del Ministerio de Justicia como intento de solución a la crisis que sufre la Administración de Justicia en cuanto a su lentitud de respuesta.

El Ministerio de Justicia daba luz verde en el año 2021 al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia, con el que se trata de superar las dificultades constatadas en los últimos años para afrontar la sobrecarga de trabajo que soportan los órganos judiciales. De acuerdo con el texto de la Exposición de Motivos de esta iniciativa, el “modelo de organización judicial basado en el tradicional Juzgado unipersonal, que ya estaba presente en el siglo XIX, respondía a las necesidades de una sociedad que, a la sazón, podía describirse como esencialmente agraria, dispersa, poco comunicada y con grandes limitaciones de movilidad que nada tiene que ver con la sociedad española de hoy”.

Con la nueva estructura organizativa se trataban de superar las disfunciones advertidas, invocando “la racionalización del modelo y la búsqueda de la eficiencia”. No son objetivos menores; ni mucho menos criticables. Ciertamente es también que en la misma Exposición de Motivos se contienen otras afirmaciones que darían lugar a un intenso debate en el que cabría más de una discrepancia. Por ejemplo, cuando se expresa que “el actual contexto de crisis sanitaria y económica exige una Administración de Justicia fuerte y capaz de afrontar los retos que plantea nuestra sociedad”.

La sociedad española hace tiempo que exige una Administración de Justicia fuerte y capaz de afrontar sus retos. Mucho antes de que surgiera la pandemia cuya incidencia ha puesto ante el espejo especial, pero no exclusivamente, las carencias del sistema.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobaba (por mayoría) en sesión de 28 de octubre de 2021 el Informe al mencionado anteproyecto, valorando de forma positiva esta iniciativa legislativa (la tercera, tras los fallidos intentos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2011 y 2014), por cuanto es un avance hacia la modernización y racionalización de la organización judicial.

El anteproyecto –considera el Consejo- deja atrás el modelo decimonónico del juzgado unipersonal dando paso a un sistema de organización colegial que, según el informe, facilita el uso eficiente de los medios personales y materiales; promueve la homogeneidad de criterios y prácticas en beneficio de la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley; gana en flexibilidad organizativa y presenta una mayor armonización con el modelo de oficina judicial.

No es éste el momento para volcar comentarios en torno a tan importante debate. Ni la función de este documento expositivo ni sus concretos contenidos avalan la oportunidad de tan profundas reflexiones. Ahora bien: no podemos renunciar a dejar constancia de la problemática que se presenta en tanto el modelo apuntado en la iniciativa legislativa no llegue a ser una realidad.

Por ágil que resulte su tramitación parlamentaria (lo que, a su vez, abre alguna incógnita) el día a día de los juzgados y tribunales cuanto pone de manifiesto es el continuo ingreso de asuntos ante un número de jueces y magistrados/as que hace años resulta manifiestamente insuficiente para atender su resolución.

Resulta imprescindible incidir en la carga de significado de este último término. Mientras puede afirmarse –con carácter general- que las oficinas judiciales pueden llegar a tramitar un número de causas nada desdeñable, donde se produce la estrechez del sistema es en el ámbito de la resolución, especialmente si tenemos en cuenta la multiplicidad de decisiones motivadas interlocutorias que resultan posibles en cualquier proceso debido al riquísimo sistema de recursos que caracteriza a nuestro ordenamiento jurídico.

### **...Y RECLAMA LA CREACIÓN DE PLAZAS JUDICIALES PORQUE EL TAPÓN ESTÁ EN LA RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

El sistema de creación sucesiva de órganos judiciales se ha demostrado insuficiente. Por falta de dotación presupuestaria de los gobiernos centrales, por ausencia de una política de previsión a largo plazo, y –no es factor de menor importancia- dada la necesidad de conciliar la capacidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas que en su día asumieron competencias en materia de Administración de Justicia.

En el mes de abril pasado, se recibía del Consejo General del Poder Judicial la petición de emisión por parte de la Sala de Gobierno de informe comprensivo de las necesidades de creación de unidades judiciales para el año en curso ante la comunicación del Ministerio de Justicia de la intención de llevar a cabo la instauración de 70 en todo el territorio nacional. El informe de la Sala de Gobierno, si bien llevó a cabo una prudente concreción (dado el

escaso éxito de todas las anualidades anteriores) de las creaciones que se consideraban más necesarias y urgentes, dejó claro que debía llevarse a cabo un cambio de paradigma.

**En lugar de priorizar la creación de órganos judiciales** (con la multiplicidad de gasto y gestión que ello comporta) **debe apostarse por la creación de plazas judiciales, especialmente de Jueces de Adscripción Territorial. La utilidad de este modelo es patente.**

**La filosofía por la que apostamos se basa en la posibilidad de asignar a más de un juez a cada órgano de naturaleza ordinaria no colegiada. La resolución de asuntos** (atribuida conforme a normas de reparto objetivas, equilibradas y predeterminadas) **alcanzaría un índice de eficiencia que no nos parece discutible.**

La solvencia de este modelo puede verificarse en la experiencia que hemos adquirido en el año 2021 con la incorporación durante prácticamente un semestre de los jueces en prácticas de la 70 Promoción de la Escuela Judicial a funciones jurisdiccionales de sustitución o (singularmente) refuerzo.

Fueron asignados al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un total de 38, que resultaron adscritos por acuerdo del presidente, a los órganos judiciales que, o bien presentaban los más altos índices de pendencia y retraso, o bien carecían de titular en la práctica debido a la situación estricta de vacante o ausencia de larga duración por otras causas.

El resultado de la experiencia ha de calificarse como positivo y digno de permanencia en el tiempo. **Si se quiere atajar el problema de la lentitud en la respuesta del sistema judicial a la demanda de tutela de los ciudadanos, es absolutamente imprescindible incrementar el número de jueces existente en la actualidad. No caben excusas.**

En la presente Memoria se solicitan:

|                       | TOTAL |
|-----------------------|-------|
| ÓRGANOS UNIPERSONALES | 99    |
| PLAZAS DE MAGISTRADOS | 31    |

## **LA INTERINIDAD DE LOS FUNCIONARIOS NO ES UN MECANISMO SATISFACTORIO PARA CUBRIR LAS VACANTES QUE SE GENERAN**

Una de las materias asumidas por las CCAA en este complejo ámbito de la "administración de la Administración de Justicia" es el relativo al personal que presta servicio en los órganos judiciales, y en el que, la naturaleza de cuerpos estatales provoca algunas disfunciones de notable repercusión en el funcionamiento de juzgados y tribunales.

La posibilidad de participación de los funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio en los concursos de ámbito nacional que se publican, provoca periódicamente una distorsión de la situación de cobertura de las plantillas de los órganos judiciales que tiene especial incidencia. En la Comunidad de Madrid esta incidencia es particularmente acuciante.

La posibilidad de acudir a la cobertura temporal de las vacantes que se generan a través de funcionarios/as interinos, es la única que -en plenitud- puede ejercer la Comunidad Autónoma, y a juicio de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia no es un mecanismo satisfactorio.

El número de vacantes generadas en los primeros meses del año en curso como consecuencia de la resolución de estos concursos de traslado ha llevado a muchos órganos judiciales a resentirse y a mermar su rendimiento.

## **MÁS DEL NOVENTA POR CIENTO DE LOS ESCRITOS YA SE PRESENTAN A TRAVÉS DE LEXNET, SI BIEN EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO VA MÁS DESPACIO**

Uno de los apartados de la Memoria de actividades que viene siendo objeto de especial seguimiento en los últimos años es el dedicado al impulso de la digitalización de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid. Se debe esta atención singularizada al impulso decidido que la Sala de Gobierno viene otorgando a esta parcela, donde si bien resultan indiscutibles los avances que se van acometiendo, no podemos ocultar que todavía no logramos la meta establecida en el llamado Expediente Judicial Electrónico y el objetivo papel cero.

Las reuniones de seguimiento que se suceden con los representantes de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, así como con los responsables del proyecto en la Agencia Madrid Digital sirven para chequear el grado progresivo de implantación de funcionalidades y aplicaciones, a la par que se dedican a la programación de objetivos y a los ajustes de evolución. A la luz de los últimos datos contrastados en la última de las mencionadas reuniones (balance del año 2021), podemos dejar constancia de que a lo largo del año:

- Se ha procedido al registro telemático de 500.000 asuntos (un 47 por ciento del total de ingresos), alcanzándose ya un 92 por ciento de escritos presentados a través del sistema Lexnet.

- El sistema de firma electrónica está implantado en el 95 % de los órganos judiciales, y su utilización es creciente.
- La instalación del sistema Fidelius (de grabación de actuaciones judiciales en soporte audiovisual) se ha completado en 206 salas de vista; y se ha instalado un total de 400 equipos de escaneo en alta velocidad para completar la confección del expediente informatizado.
- En algunos órganos judiciales el EJE (Expediente Judicial Electrónico) ya es una realidad. A título de ejemplo destaca la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior, y, para ciertas clases de procesos, algunos Juzgados de Primera Instancia.

En otros órganos todavía sigue siendo el formato papel el que soporta el contenido de las causas judiciales, ya sea de forma íntegra (particularmente la segunda instancia penal) o en medida que no permite hablar de expediente electrónico. Y con la finalidad de avanzar la situación que reflejamos, además del seguimiento de los planes de implantación de aplicaciones al que ya nos hemos referido, la Sala de Gobierno ha tomado algunas decisiones en los últimos meses de las que conviene dejar constancia:

- En la sesión de 24 de enero de 2022 se aprobaron las propuestas presentadas por el Secretario de Gobierno como Instrucciones a seguir para la correcta formación del Expediente Judicial electrónico.
- En la misma sesión se aprobó el protocolo de remisión telemática de atestados a los Juzgados de Instrucción, Primera Instancia e Instrucción y Violencia sobre la Mujer, con el fin de impulsar el inicio ordenado del Expediente Judicial Electrónico en el orden jurisdiccional penal, que sigue siendo el que menos avances había experimentado del conjunto de actuaciones judiciales.
- Para aquellos casos en los que se haya logrado ya la tramitación electrónica del expediente en su totalidad, la Sala de Gobierno de 25 de abril ha dispuesto la validez de su remisión informática al órgano de apelación, sin que le resulte por éste exigible al Juzgado de origen el volcado o impresión en papel. Se supera con ello el desfasado criterio (del año 2017) de exigencia de circulación exclusivamente en papel de las causas judiciales. La evolución experimentada desde entonces, y aun reconociendo que no está todavía reconocida por el Consejo General del Poder Judicial la validez obligatoria y exclusiva del EJE, permite avanzar en la gestión digital de procedimientos sin que quepa la exigencia de impresión de aquellos que ya no se han generado y desarrollado en el soporte histórico.

**EN 2021 SE INAUGURARON LOS NUEVOS JUZGADOS DE NAVALCARNERO Y SE ESTABLECIÓ QUE EL AÑO 2026 SERÁ EL DE LA FUTURA CIUDAD DE LA JUSTICIA**

La renovación de las infraestructuras judiciales es también objeto de reflejo en esta Memoria Anual dado su incuestionable interés. Con relación al año 2021 han de destacarse dos avances importantes en este capítulo:

- En primer lugar, la inauguración el día 15 de octubre de 2021 del nuevo edificio que alberga la sede de los juzgados de Navalcarnero. Ha de reconocerse la calidad y amplitud de la obra, con capacidad para albergar no solo los órganos que en la actualidad integran este partido judicial sino también con espacios de reserva para eventuales y futuras creaciones de ampliación.
- En segundo lugar, el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid, tras dos intentos fallidos en años pasados de edificar en el nuevo barrio de Valdebebas un complejo en el que se alojen todas las sedes del partido judicial de Madrid.

El día 17 de septiembre de 2021 se celebró una primera reunión entre la Sala de Gobierno y los representantes de la Consejería de Presidencia, Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid de naturaleza informativa acerca del proyecto que poco después sería difundido a los fines administrativos de Información Pública.

De acuerdo con la documentación recibida en la reunión, el complejo de la Ciudad de la Justicia de Madrid se albergará en una parcela de 132.574 metros cuadrados, con acceso mediante una estación-intercambiador de metro (ampliación de la línea 11) con conexión a cercanías. Acogerá un total de 356 órganos judiciales, distribuidos en 28 edificios, con espacio de reserva para futuras ampliaciones. La fecha estimada de ocupación se prevé para el año 2026.